



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROVERSIAS Y
SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS**

EXPEDIENTE No. 381/2012

**TÉCNICA PARA OFICINAS DE CULIACÁN, S.A. DE C.V.
VS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**

RESOLUCIÓN No. 115.5.

Ciudad de México, Distrito Federal, a **seis de agosto de dos mil doce.**

Visto el expediente al rubro citado, abierto con motivo de la inconformidad promovida por la empresa **TÉCNICA PARA OFICINAS DE CULIACÁN, S.A. DE C.V.**, contra actos de los **SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**, derivados de la Licitación Pública Nacional No. **LA-925006998-N10-2012**, convocada para la **“Adquisición de Software, Equipo Médico y de Laboratorio, Equipo y Aparatos de Comunicación, Equipo y Aparatos Audiovisuales”**, y:

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Por acuerdo 115.5.1952 de dieciséis de julio de dos mil doce, se requirió a la convocante informara lo siguiente: **1)** Origen y naturaleza de los recursos económicos utilizados en la Licitación Pública Nacional No. **LA-925006998-N10-2012**; **2)** Monto económico autorizado y, de ser el caso, adjudicado en la citada licitación; **3)** Estado actual del procedimiento; y **4)** Informara si la empresa **TÉCNICA PARA OFICINAS DE CULIACÁN, S.A. DE C.V.** manifestó su interés en participar en la licitación impugnada.

Información que fue rendida por los **SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA** mediante Oficio No. DJN-0373/12 recibido en esta Dirección General el veinticuatro de julio de dos mil doce, comunicando: **1)** Que los recursos económicos autorizados provienen del **Fondo de Previsión Presupuestal 2%**, acreditándose mediante diversa documentación presentada en el informe de mérito; **2)** Que el monto económico autorizado ascendió a [REDACTED] mientras que el adjudicado fue de [REDACTED] M.N.); **3)** Que el procedimiento de licitación concluyó con el fallo de dieciséis de julio de dos mil doce; **4)** Que la empresa **TÉCNICA PARA OFICINAS DE CULIACÁN, S.A. DE C.V.** sí manifestó su interés en participar en la licitación impugnada mediante escrito de veintiocho de junio de dos mil doce.

SEGUNDO. En razón de la información anterior, se turnaron los autos del expediente al rubro citado para la resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

ÚNICO. Estudio Preferente. Por cuestión de orden y por tratarse de un presupuesto de procedibilidad que legitima el accionar de toda Autoridad, se analiza en primer término la competencia legal de la Secretaría de la Función Pública, a través de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, para conocer de la instancia de inconformidad promovida por **TÉCNICA PARA OFICINAS DE CULIACÁN, S.A. DE C.V.** contra actos de los **SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**, derivados de la Licitación Pública Nacional No. **LA-925006998-N10-2012**.

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, es la autoridad competente para conocer de las inconformidades que se suscitaren con motivo de procedimientos de contratación pública celebrados por las entidades federativas o sus entes públicos, en los que haya cargo total o parcial a recursos federales, en términos de los siguientes ordenamientos legales:

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 65. La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación:

III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 62. Corresponderá a la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Resolver, en los términos de las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, las inconformidades que formulen los particulares con motivo de:



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROVERSIAS Y
SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS

EXPEDIENTE No. 381/2012

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

1. Los actos realizados por los estados y municipios, el Distrito Federal y sus órganos político-administrativos derivados de procedimientos de contratación con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, y que contravengan las disposiciones mencionadas en el presente artículo, salvo en los casos en que la Secretaría tenga celebrado convenio de coordinación con las propias entidades federativas, a efecto de que sean éstas las que conozcan y resuelvan dichas inconformidades.

Ahora bien, los **SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA** en su informe previo recibido el veinticuatro de julio de dos mil doce (fojas **011** a **012**), manifestó lo siguiente:

[REDACTED]

1. [REDACTED]

[...]"

Para tal efecto, la convocante presentó la documentación que acreditó la naturaleza de los recursos a los que hizo referencia en su informe previo antes citado, es decir, del Fondo de Previsión Presupuestal 2%, y que consiste en lo siguiente:

- Convenio de colaboración de tres de noviembre de dos mil once, celebrado entre el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y los Servicios de Salud de Sinaloa (fojas **041** a **046**), así como su Anexo I (foja **047**):

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[...]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[...]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROVERSIAS Y SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS

EXPEDIENTE No. 381/2012

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

[Redacted text block]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

- Oficio No. CNPSS/DGF/2689/11, de siete de noviembre de dos mil once, firmado por el Director General de Financiamiento del **Seguro Popular**:

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[...]"

- Oficio No. GFANP/153200/924/2011, de primero de noviembre de dos mil once, firmado por el Titular de la Gerencia Fiduciaria de Administración de Negocios Públicos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS):

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[...]"

- Oficio No. SS/DS/001/2012, de cuatro de enero de dos mil doce, firmado por el Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa (foja 065):

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROVERSIAS Y SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS

EXPEDIENTE No. 381/2012

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

[Redacted]

[...]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[...]"

En adición a lo antes expuesto, se destaca que en la propia convocatoria de la Licitación Pública Nacional No. LA-925006998-N10-2012 se estableció que los recursos económicos que se ejercerían para la adquisición de equipo médico y de laboratorio provendrían del Fondo de Previsión Presupuestal 2%, como puede observarse en la siguiente transcripción:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[...]

[Redacted]

Por lo anterior, es claro que los recursos económicos autorizados para la Licitación Pública Nacional No. LA-925006998-N10-2012 impugnada corresponden al Fondo de Previsión Presupuestal 2%, mismos que son parte del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), y que tienen

sustento en la Ley General de Salud y su Reglamento, cuyos articulados pertinentes se transcriben a continuación en lo que aquí interesa:

“LEY GENERAL DE SALUD

**Título Tercero Bis
De la Protección Social en Salud**

**Capítulo I
Disposiciones Generales**

Artículo 77 bis 2. *Para los efectos de esta Ley, se entenderá por Sistema de Protección Social en Salud a las acciones que en esta materia provean los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.*

La Secretaría de Salud coordinará las acciones de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, los cuales contarán con la participación subsidiaria y coordinada de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en este Título.

Para efectos de este Título se entenderá por Regímenes Estatales, a las acciones de protección social en salud de los Estados de la República y del Distrito Federal.

Artículo 77 bis 16. *Los recursos de carácter federal a que se refiere el presente Título, que se transfieran a los estados y al Distrito Federal no serán embargables, ni los gobiernos de los estados podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo.*

Dichos recursos se administrarán y ejercerán por los gobiernos de los estados y el Distrito Federal conforme a sus propias leyes y con base en los acuerdos de coordinación que se celebren para tal efecto. Los gobiernos de los estados deberán registrar estos recursos como ingresos propios destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título.

El control y supervisión del manejo de los recursos a que se refiere este Capítulo se realizará conforme a los términos establecidos en el Capítulo VII de este Título.

**Capítulo VII
De la Transparencia, Control y Supervisión del Manejo de los Recursos del Sistema de Protección Social en Salud**

Artículo 77 bis 32. *El control y supervisión del manejo de los recursos federales a que se refiere este Título quedará a cargo de las autoridades siguientes, en las etapas que se indican:*

I. Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a los estados y al Distrito Federal, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública;

II. Recibidos los recursos federales por los estados y el Distrito Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos de los estados.

La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones, ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos recursos.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROVERSIAS Y
SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS

EXPEDIENTE No. 381/2012

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Título Cuarto
Del Financiamiento del Sistema
Capítulo I
De las Aportaciones de los Gobiernos Federal y de las Entidades Federativas
Sección Primera
Generalidades

Artículo 77. *Las erogaciones del Gobierno Federal relacionadas con el Sistema deberán estar específicamente identificadas en el presupuesto autorizado de la Secretaría.*

[...]

La programación, presupuestación, ejercicio, control y fiscalización de los recursos federales vinculados con el Sistema estará sujeta a lo establecido en los artículos 77 bis 16 y 77 bis 32 de la Ley, en el presente Reglamento y a lo señalado por los diversos ordenamientos aplicables en la materia.

De lo anteriormente transcrito, se tiene que los recursos que el Gobierno Federal transfiera en el marco del **Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)**, se administrarán y ejercerán por los Gobiernos de los Estados y el Distrito Federal conforme a sus propias leyes y con base en los acuerdos de coordinación que se celebren para tal efecto, debiendo dichas entidades registrar tales recursos como ingresos propios y destinarlos específicamente a los fines establecidos.

Asimismo, corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los estados y el Distrito Federal, la supervisión y manejo de los recursos desde su recepción y hasta su erogación total.

Por lo anterior, se advierte la concurrencia de dos cuerpos normativos aplicables:

En primer término, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece las reglas y procedimientos sobre los cuales deben planearse, programarse, presupuestarse, contratarse, gastarse y controlarse la materia de adquisiciones en que intervengan recursos federales, así como la instancia de inconformidad que se formule por los particulares que se consideren afectados por actos en las contrataciones públicas previstas.

Por otra parte, es aplicable al caso en concreto la Ley General de Salud, en cuyo texto normativo se establecen las reglas y lineamientos en lo que concierne a los recursos provenientes del Sistema de

Protección Social en Salud, el cual, como se insertó anteriormente, queda a cargo de las autoridades competentes en cada entidad federativa, registrándose dichos recursos como ingresos propios.

Por tanto, toda vez que los recursos del Sistema de Protección Social en Salud están previstos en una Ley especial, en este caso la Ley General de Salud, prevalece dicho cuerpo normativo en relación con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en consecuencia, para la administración, control y vigilancia de dichos recursos debe observarse lo establecido en la Ley General de Salud.

Sustenta lo anterior la Tesis P. VII/2007, sostenida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, de rubro y texto siguiente:

“LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.¹ (El subrayado es añadido)”

Aunado a lo anterior, es importante tener presente el contenido de las **Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud**, mismas que fueron aprobadas el siete de octubre de dos mil diez y que en lo conducente se transcriben a continuación:

“REGLAS DE OPERACIÓN DEL CONTRATO FIDEICOMISO: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

APROBADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DE LA TERCERA Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2010

Capítulo V.- De la Transparencia y rendición de cuentas

¹ Publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXV, abril de 2007, Novena Época.



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROVERSIAS Y
SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS

EXPEDIENTE No. 381/2012

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Regla 59.- El control y supervisión del manejo de los recursos federales quedará a cargo de las siguientes autoridades y en las siguientes etapas:

I a II. [...]

*III. Para el caso de que los recursos se transfieran a los Estados o al Distrito Federal, **corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos**, sin menoscabo de las demás instancias fiscalizadoras de control federal.*

...”

En las condiciones anteriormente expuestas, se determina que al establecerse en los diversos ordenamientos legales señalados con antelación que el control, supervisión y gasto de los recursos económicos se confiere a las Entidades Federativas, o en su caso, al Gobierno del Distrito Federal, ello comprende también a la inconformidad que constituye, entre otros, un medio de control de legalidad en el régimen de contrataciones públicas del Estado.

Es decir, al disponerse tanto en la Ley General de Salud, y su Reglamento, como también en las Reglas de Operación del Contrato Fideicomiso Sistema de Protección Social, que los recursos económicos transferidos a los Estados o al Distrito Federal serán controlados y supervisados internamente por sus respectivos Gobiernos, es incuestionable que ello comprende también a la instancia de inconformidad al tratarse de un medio de control de legalidad respecto a los procedimientos de contratación que celebra el Estado, toda vez que donde la Ley no distingue no cabe lugar a la distinción.

En ese sentido, la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, no puede ir más allá de la competencia que le otorgan su Reglamento Interior, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley General de Salud en lo que respecta a la naturaleza de los recursos.

En consecuencia, toda vez que en primera instancia corresponde a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos locales, esta dependencia del Ejecutivo Federal no es la competente para conocer de la inconformidad promovida por **TÉCNICA PARA OFICINAS DE CULIACÁN, S.A. DE C.V.** contra actos de la Licitación Pública Nacional No. **LA-925006998-N10-**

2012, pues como se expuso con antelación, las autoridades competentes para la administración, control y vigilancia de los recursos provenientes del **Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)** son las entidades federativas, en este caso, el Gobierno del Estado de Sinaloa.

Es aplicable al caso concreto, la Tesis Jurisprudencial No. 293, visible a fojas 511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Tribunal en Pleno, que establece:

*“**AUTORIDADES.**- Las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permite.”*

Asimismo, es aplicable la Tesis relacionada con la Jurisprudencia No. 293, citada en el párrafo precedente, visible a fojas 513, que señala:

*“**AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, FACULTADES DE LAS.**- Las autoridades administrativas no tienen más facultades que las que expresamente les conceden las leyes, y cuando dictan alguna determinación que no está debidamente fundada y motivada en alguna ley, debe estimarse que es violatoria de las garantías consignadas en el artículo 16 Constitucional.”*

Por lo anterior, esta Dirección General es **legalmente incompetente** para conocer y resolver la presente instancia, razón por la cual, previa carpeta de antecedentes que se archive en esta Unidad Administrativa, **remítase** el original del expediente en que se actúa constante de **158 fojas útiles** a la **UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**, para que en ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda.

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se

RESUELVE

PRIMERO. Esta Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas es **legalmente incompetente** para conocer y resolver la inconformidad planteada por la empresa **TÉCNICA PARA OFICINAS DE CULIACÁN, S.A. DE C.V.**

SEGUNDO. Remítase el expediente **381/2012**, constante de **158 fojas útiles** a la **UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS**, para que en el ámbito de sus atribuciones resuelva lo que en derecho corresponda, previa carpeta de antecedentes que se deje en el archivo de esta Dirección General.

PARA: C. [REDACTED].- DIRECTOR GENERAL.- TÉCNICA PARA OFICINAS DE CULIACÁN, S.A. DE C.V.- Río Mixcoac No. 36, Piso 07, Interior 702, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, Distrito Federal.

C. [REDACTED].- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.- SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.- Cerro Montebello No. 150 Oriente, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Municipio de Culiacán, Sinaloa. Tel. 01 (667) 759 2508. Conmutador: 01 (667) 759 2500, Ext. 538. Fax: 01 (667) 759 2512.

C. [REDACTED].- TITULAR DEL RAMO.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.- GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.- Av. Insurgentes s/n, Palacio de Gobierno, Primer Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Municipio de Culiacán, Sinaloa. Tels. 01 (667) 758 5310 y 758 5300, Ext. 1902. **Se remite original del expediente 381/2012 constante de 158 fojas.**

“En términos de lo previsto en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión se suprimió la información considerada como reservada y confidencial en concordancia con el ordenamiento citado.”